

El odio como estrategia. El estado de opinión contra la JEP

Juan Carlos Arenas Gómez

Profesor del Instituto de Estudios Políticos
Universidad de Antioquia
(juan.arenas@udea.edu.co)

“El odio, el portero atroz, nos deja a la intemperie”.

Rafael Cadenas

La creación de un clima de hostilidad permanente

L

as objeciones a la JEP dieron paso a más de dos meses de publicidad a favor de las tesis del Centro Democrático sobre el proceso de paz y sus consecuencias. Todos los medios atentos y en cadena han registrado este relato y han hecho eco de las ideas que este grupo defiende sobre el pasado reciente de Colombia. Como políticos hicieron de la catástrofe una bandera y, al tiempo que la mantienen como su apuesta de mayor alcance, la ofrecen como un vidrio opaco que refuerza la desconfianza de la opinión pública ante la implementación de lo acordado en el proceso de paz.

Unidos por el odio y siguiendo un libreto repleto de rencores, han ocupado el lugar de atizadores de la hoguera, ofreciendo un horizonte colonizado por la venganza en el que abrevan un número significativo de sus seguidores, incluidos los más radicales, que resultan más proclives a arrasar con las instituciones y con las salvaguardas del Estado de derecho. Su práctica y el espíritu de sus acciones queda bien descrito en un viejo poema de Rafael Cadenas titulado categóricamente *Inquisidores* (2000, pág. 217). Allí están retratados:

*Van de un sitio a otro midiendo,
anotando, mordiendo aquí, más
allá, llenos de baba de pasado, mue-
cas, rótulos. Indician, señalan, dic-
tan, corrigen, acosan. Ahí, dicen,
está el culpable. Nuestros códigos*

amaestrados lo perseguirán ladrando día y noche (...) Por el mundo, siempre, con sus libros de cuentas, sus lápices perversos, sus esto sí esto no, sus autos de fe, sus pócimas vengativas, extendiendo un rojo metro sobre el cuerpo que la jauría va a perseguir.

Y en este santo oficio de la inquisición, sus múltiples voceros, increpan y maldicen y en la tinta que dejan en los diarios, en los videos que circulan por las redes sociales, en los blogs que alimentan disciplinadamente, reiteran su deseo de encadenar a otros, de atiborrar las cárceles con aquellos a quienes han puesto en el lugar de enemigos jurados.

No conciben un mundo en el que se concilie la diferencia política, los conflictos que al tramitarse abren oportunidades para el progreso y la representación de intereses genuinamente plurales y diversos. Incapaces de concebir un país reconciliado, se han enforcado por malograr la oportunidad que supone la desmovilización de un contingente armado y han hecho más difícil la sustitución del código de la guerra por un nuevo lenguaje que permita tramitar los conflictos y las diferencias sin que medie la eliminación física y sistemática de aquellos que son portadores de visiones e intereses divergentes.

Con la postulación del odio como principio han querido ocultar el hecho político de que toda salida de una confrontación armada de larga duración, cuyo balance no remite a una derrota militar ni estratégica, supone el

reconocimiento entre las partes y requiere el compromiso de defender visiones en disputa sobre la sociedad sin recurrir a la eliminación de los contendientes (Uprimny, 2018, pág. 80). Este criterio político, que sirve de fundamento a una salida inteligente de la guerra, había ido ganado un terreno frágil pero importante entre los formadores de opinión (Gómez Giraldo & Cárdenas Ruiz, 2018, págs. 235-236), pero en el contexto actual de radicalización y exacerbación de un espíritu retaliatorio, ha sido sometido a lecturas confusas que lo caricaturizan como una abdicación del poder legítimo del Estado.

Para desprestigiar la importancia estratégica y el valor ético de la negociación política, han optado por acrecentar el resentimiento de una sociedad adolorida, por utilizar sin escrúpulos *el dolor de una parte de las víctimas del conflicto*, conduciéndolas en medio de la ofuscación a ocupar posiciones en los bandos más hostiles. Y, como el reto de concebir al otro diferente como opositor y no como enemigo desborda su estatura moral, han puesto todos sus recursos institucionales al servicio de aumentar los artificios para que la hostilidad no ceda un ápice en su función de crear bandos irreconciliables. De paso, con el espectáculo en los medios y en las redes sociales, ocultan las múltiples ganancias económicas, sociales y políticas que obtienen mientras persista el desastre.

No les resulta rentable un país reconciliado y orientado a crear y fortalecer redes de confianza entre aquellos que antes participaban de una disputa a muerte. Y esto es algo que empeora nuestra condición de república indecisa, porque quienes presiden el gobierno o lideran acciones en el legislativo o son los responsables de los órganos de investigación judicial, además de la evidente mediocridad en otros temas, se esfuerzan en condenarnos a vivir en medio de una disputa sangrienta y en someternos al designio de intereses que parecen incuestionables. El discurso del odio, que obstruye las posibilidades de reconci-

liación, se refuerza con el apoyo de redes de poder que cruzan instituciones vitales para la democracia y para el funcionamiento del Estado, redes articuladas con negocios que van y vienen entre los mundos privados y públicos, cuyos agentes conocen el mecanismo para hacer fluir las *ilegalidades admitidas* dentro del sistema político y afinar las prácticas que les permiten mantener la causa común de atizar el espíritu de confrontación para obstaculizar la formación de otras preguntas y reclamos.

Es un clima de opinión que salvaguarda con obstinación la deformación de los hechos y mantiene la práctica de maltratar a quienes han asumido el ejercicio de la oposición democrática. Un clima de opinión que muestra la reconciliación como quimera y que ante las posibilidades de tener menos guerreros en un país que se desangra, sólo atina a advertir sobre los costos de emprender este camino y a *señalar como mal ejemplo* la implementación de un mecanismo de justicia transicional que puede permitir, al tiempo, construir un equilibrio entre justicia, verdad y reparación y ofrecer una alternativa razonable a las lógicas de justicia del enemigo, que engendrarían nuevos ciclos de retaliación. Se pide "genuina paz" como estrategia para oponerse a un acuerdo logrado con inteligencia y tenacidad, aunque defendido mediocrementemente por algunos de sus arquitectos.

El teatro de las objeciones: la mediación institucional de la hostilidad

En un contexto como el descrito, resulta de vital importancia entender las mediaciones institucionales con las que se ha ido reforzando el clima de hostilidad para bloquear una parte importante de las tareas conducentes a la reconciliación. Después de los resultados electorales de 2018, la coalición que gobierna, estructurada alrededor del Centro Democrático, en colaboración con el Partido Conservador y los movimientos cristianos,

más algunos integrantes del Partido de la U y de Cambio Radical y con el apoyo de una nube de empresarios que se incorporaron al gobierno como funcionarios o como consejeros, ha realizado acciones conscientes y calculadas para erosionar el respaldo social al proceso de paz, para obstaculizar el ya difícil recorrido de la implementación y para que el entorno institucional esté plagado de francotiradores, que pongan sus cargas contra quienes defienden la necesidad de que el Estado cumpla cabalmente lo acordado en el complejo proceso de negociación llevado a cabo en La Habana.

Una de las estrategias para bloquear el Acuerdo de Paz y hacer inviables sus promesas, consiste en enfilear baterías contra el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, contra las instituciones que lo integran y contra los funcionarios que deben atender las labores encomendadas a las mismas. En el caso de la JEP, sus detractores han ofrecido una caricatura que le atribuye un espíritu contrario al de "investigar, juzgar y sancionar las conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos", y la presenta ante la gente como un "tribunal de impunidad" (Colombia 2020, 2019).

Un recorrido por varias columnas de líderes de opinión cercanos o directamente implicados en el uribismo, permite identificar las "ideas-sentimientos" que constituyen el almendrán de su defensa del "estado de confrontación", que erosiona drásticamente las posibilidades de reconciliación y que refuer-

za la hostilidad, dando señales de no superación de los estados de guerra. Un síntoma de esta situación es que, a pesar de que insistan en que no le apuestan al recrudecimiento de la confrontación armada, no son capaces de desautorizar públicamente a algunos de sus seguidores que repiten, con excitación, que “plomo es lo que hay” o que amenazan con “pelar” en la calle a quienes están por fuera del estándar de valores que ellos suponen que hay que proteger (Jaramillo González & Garzón Ramírez, 2019).

La primera de estas ideas-sentimientos está asociada con los resultados y las consecuencias del plebiscito de 2016, con el que se pretendía refrendar los acuerdos y dotarlos de un amplio margen de legitimidad democrática. Varios académicos han resaltado el déficit en el apoyo popular que conspira contra la implementación del acuerdo final (Gutiérrez Sanín, 2018; Uprimny, 2018). Pero la estrategia del CD es ahondar dicho déficit y *reforzar la sensación de agravio*, alimentando la creencia de la opinión pública de que la adopción de los acuerdos por la vía legislativa traicionó el resultado de las urnas y defraudó la voluntad popular.

Después de los resultados del 2 de octubre de 2016, el Congreso de la República asumió la tarea de discutir, introducir ajustes y refrendar lo acordado, ya no sobre el texto original de La Habana, sino sobre aquel que resultó de los ajustes posteriores a la negociación con los *voceros del no*. El detalle de la participación de estos *voceros* en la negociación unilateral de los acuerdos es algo que el CD minimiza o trata de ocultar, presentándolo como una negociación fallida, por-

que este hecho tiene como consecuencia el reconocimiento del carácter heterogéneo de la masa de votantes que apoyó el no y dicha heterogeneidad debilita sus banderas.

Adicionalmente, suelen socavar la legitimidad de la acción del Congreso, sugiriendo que cualquier decisión favorable a la implementación de los acuerdos está movida por la “mermelada”, recurso a través del cual el gobierno controlaba las voluntades de los congresistas. Esta estrategia de etiquetamiento del comportamiento de los legisladores, invisibiliza y deslegitima la acción consciente y comprometida de muchos de ellos que, de manera responsable, actuaron a favor del cabal cumplimiento de lo acordado. Así, la retórica para deslegitimar los acuerdos y su incorporación al marco normativo y constitucional tiene en la idea del “robo del plebiscito” y en la denuncia de “la mermelada santista” dos claves “pegajosas” para movilizar el malestar colectivo en contra de las bondades de las instituciones de justicia transicional y de su marco regulatorio.

La segunda idea-sentimiento está asociada con los reclamos de “no impunidad”. En ese plano, para los detractores del acuerdo y del sistema de justicia transicional, tanto el tribunal como quienes lo diseñaron y quienes fueron partícipes del proceso de selección de sus integrantes son sectores *complacientes con la criminalidad* (Escobar Valencia, 2019). Para ellos, la JEP es un engendro que atenta contra principios mínimos de justicia. Entonces, han construido un mensaje en el que etiquetan todo lo que esté asociado con el Sistema de Justicia Transicional con las fronteras de la delincuencia y con el debilitamiento de las herramientas que el Estado tiene para luchar contra la criminalidad. Advierten, con espanto, que cualquier proceso de juzgamiento en el marco de esta justicia interina —para usar la expresión acuñada por Álvaro Uribe— protege el narcotráfico, auspicia el encubrimiento de criminales de lesa humanidad, de violadores de niños y propicia

la continuidad de nuevas violencias debido al mal ejemplo (Lafaurie Rivera, 2019).

Presentar la JEP como el espacio de la impunidad y complacencia con el terrorismo y el narcotráfico es, además de mentiroso, una manera de erosionar la posibilidad de que, al menos por una ocasión, se pueda afrontar de forma sistemática un juicio responsable sobre lo que ha significado el larguísimo conflicto armado en Colombia, abriendo espacios no sólo para castigar a los responsables, sino también para alcanzar unos niveles razonables de verdad y reparación.

El uribismo ha encontrado que es rentable, al menos en el corto plazo, dilatar los trámites para que la justicia transicional tenga reglas claras, mientras va incrementando el ruido y los mensajes desafortunados que deforman la realidad para socavar la confianza ciudadana en la institucionalidad derivada del acuerdo de paz. Y para su estrategia, estas ideas falsas tienen como ventaja que pueden ser repetidas sin discernimiento, que están atadas a la costumbre de una sociedad que combina, a la vez, la práctica de violar frecuentemente la ley y de pedir con obstinación los mayores castigos. Con un recurso de esta naturaleza, se logra reforzar la sensación de que la sola implementación del sistema constituye una gran traición a la sociedad y un fraude a las expectativas de las víctimas de ver adecuadamente juzgados y castigados a los causantes de sus males.

El presidente Duque, que por el lugar que ocupa tiene que ser medido con los llamados en contra de las instituciones, sin embargo, está preso de la estrategia de su partido y del líder de su bancada. Las razones para objetar algunos artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, ponen en evidencia que la inconveniencia política radica en que lo acordado entre el Estado y las Farc dio como resultado una agenda de construcción de Estado contraria a la del partido de gobierno. Lo que dejó al presidente en la situación paradójica de estar a la cabeza de un gobierno cuyo entorno

político se constituye en la principal fuerza de oposición contra el Estado.

Cuando el presidente, en su alocución, habla de “todos los colombianos” como amigos de la paz” y subraya la “excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia”, no señala a aquellos que en los territorios han asesinado a más de 170 líderes sociales durante lo transcurrido del gobierno o han matado a 128 desmovilizados de las Farc (Agence France Press, 2019) o siguen desplazando familias enteras en lugares que parecen claves para ciertos desarrollos económicos. Su alusión genérica a “todos los colombianos” ha servido, más bien, para reforzar la idea errónea según la cual *todos los colombianos* apostaron por la misma bandera de arrasamiento o mutilación del acuerdo para salir del conflicto.

Toda esta estrategia orquestada por el uribismo, además de mantenernos en un ambiente de belicosidad, refuerza la estigmatización, da mayor margen de juego a las posiciones extremas y arrincona a los líderes más conciliadores y proclives a un pacto que nos ayude a salir del atolladero. No es casual que en este contexto se escuche muchísimo menos la voz de Humberto de la Calle o de Sergio Jaramillo o de Guillermo Rivera que la de Paloma Valencia, Carlos Felipe Mejía o Álvaro Uribe Vélez. No es casual tampoco, que el ojo avizor de los medios de comunicación ponga su énfasis no en el compromiso de Timochenko, Carlos Antonio Losada o Victoria Sandino sino en las disputas protagonizadas por Iván Márquez o en la persecución enconada contra Zeuxis Pausias Hernández.

Cuando uno piensa en los últimos acontecimientos, ve repetir historias dolorosas de las que este país ha sido testigo. Intentos de cambio que se ven frustrados porque sectores que tendrían que ceder un milímetro de sus privilegios, creen que los cambios que se precisan solo pueden hacerse para asegurar que sus beneficios se vean reforzados y que aquellos sectores que se les oponen, además de hacer acto de contricción, tendrían que, para sobrevivir, sumarse a sus huestes.

Habiendo pagado una alta cuota de dolor y de pérdida de vidas, hemos ido aprendiendo que terminar la guerra es una tarea necesaria y difícil, que reclama el compromiso de muchos sectores de la sociedad y la comprensión de aquella cosa tan sencilla que Carlos Castro Saavedra (2017, pág. 33) había manifestado en un poema escrito hace más de 50 años:

*Vamos a florecer, decid conmigo,
y tenemos raíces profundas en la tierra.
Vamos a florecer, mas no podemos
florecer en la rama de la guerra.*

Hoy podríamos repetir estos versos como una consigna, como un cántico esperanzado pero realista.

Referencias

- AGENCE FRANCE PRESS. (15 de abril de 2019). 128 exmiembros de Farc han sido asesinados desde 2016. *El Nuevo Siglo*.
- CADENAS, R. (2000). *Obra Entera. Poesía y prosa (1958-1995)*. México: FCE.
- CASTRO SAAVEDRA, C. (2017). *El mundo por dentro. Antología*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- COLOMBIA 2020. (2 de febrero de 2019). *Las campañas engañosas del Centro Democrático contra la JEP*. Obtenido de El Espectador: <https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/las-campanas-enganosas-del-centro-democratico-contra-la-jep-articulo-857602>
- ESCOBAR VALENCIA, J. D. (4 de junio de 2019). Estamos en manos de bandidos. *El Colombiano*.
- GÓMEZ GIRALDO, J. C., & Cárdenas Ruiz, J. D. (2018). El papel de la opinión publicada en la prensa escrita colombiana antes del plebiscito del 2 de octubre de 2016. *Palabra Clave*, 204-253. doi:10.5294/pacla.2019.22.1.9
- GUTIÉRREZ SANÍN, F. (2018). Los enredos de la paz. En M. García Villegas (Ed.). *¿Cómo mejorar a Colombia? 25 ideas para reparar el futuro* (págs. 99-121). Bogotá: Ariel - IEPRI.
- LAFABURIE RIVERA, J. F. (23 de marzo de 2019). Los divisionistas. *Periódico Debate*. Obtenido de <http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/22351-los-divisionistas>
- UPRIMNY, R. (2018). ¿Una paz incluyente y fundacional? En M. García Villegas (Ed.), *¿Cómo mejorar a Colombia? 25 ideas para reparar el futuro* (págs. 77-98). Bogotá: Ariel - IEPRI.

P

resentar la JEP como el espacio de la impunidad y complacencia con el terrorismo y el narcotráfico es, además de mentiroso, una manera de erosionar la posibilidad de que, al menos por una ocasión, se pueda afrontar de forma sistemática un juicio responsable sobre lo que ha significado el larguísimo conflicto armado en Colombia, abriendo espacios no sólo para castigar a los responsables, sino también para alcanzar unos niveles razonables de verdad y reparación.